EXPEDIENTE No: CEDH/VZS/III/161/10
QUEJOSO: N1
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN No.
17/2012
**AUTORIDAD
DESTINATARIA:** PROCURADURÍA
GENERAL
DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 27 de junio de 2012

LIC. MARCO ANTONIO HIGUERA GÓMEZ
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA
PRESENTE.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º; 2º; 3º; 4º Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1º; 7º, fracción III; 16, fracción IX; 57 y 59 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, así como 1º; 4º; 77; 94; 95 y 96 de su Reglamento Interior, ha examinado los elementos contenidos en el expediente CEDH/VZS/III/161/10, relacionados con el asunto del señor N1 y vistos los siguientes:

I. HECHOS

A. El 30 de septiembre de 2010, esta Comisión Estatal recibió escrito de queja del señor N1, en el cual señaló que el día 10 de mayo de 2010, aproximadamente a las 10:00 horas, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial del Estado cuando se encontraba laborando en su fuente de trabajo en el poblado de ****, perteneciente al municipio de Mazatlán, Sinaloa, quienes le imputaban el supuesto delito de violación.

Señala el quejoso no haber cometido delito alguno y que por el contrario, fue detenido sin motivo, sin causa justa, sin existir en su contra orden de aprehensión o comparecencia en su contra y sin estar en los supuestos de flagrancia.

Que al ser detenido por los elementos aprehensores fue trasladado a escondidas hasta las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado ubicadas

en Mazatlán, Sinaloa, en donde además se encuentran las instalaciones de la agencia Cuarta del Ministerio Público del fuero común, lugar en donde refiere que aproximadamente a las 21:00 horas le recepcionaron su declaración ministerial, en la cual pusieron lo que quisieron y un agente de la citada corporación policiaca le obligó a firmar, sin leer su contenido y finalmente lo dejaron ir.

Refiere que el 14 del mismo mes y año acudió a la agencia del Ministerio Público de ****, Mazatlán, Sinaloa, a fin de que le informara del asunto en el cual lo habían hecho declarar, lugar en donde se le explicó que existía una averiguación previa en su contra por el delito de violación, manifestando que efectivamente sí firmó la declaración ministerial que aparece en dicha indagatoria pero sin que lo dejaran leerla, por lo que refiere él no declaró lo que estaba escrito en dicho documento.

B. Con motivo de dicha inconformidad, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos registró el expediente número CEDH/VZS/III/161/10, en el que, con el objeto de contar con elementos suficientes para la debida integración del mismo, se formularon diversas diligencias.

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

1. La queja presentada por el señor N1 el 30 de septiembre de 2010.
2. Con oficio número CEDH/VZS/MAZ/001046 de fecha 6 de octubre de 2010, este organismo estatal solicitó a la titular de la agencia única del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa, el informe correspondiente en relación a los actos señalados por el quejoso.
3. Con oficio número CEDH/VZS/MAZ/001054 de fecha 6 de octubre de 2010, este organismo estatal solicitó a la titular de la agencia cuarta del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, el informe correspondiente en relación a los actos señalados por el quejoso.
4. Con oficio número CEDH/VZS/MAZ/001059 de fecha 6 de octubre de 2010, este organismo estatal solicitó al comandante de la Policía Ministerial del Estado con base en ****, Mazatlán, Sinaloa, el informe correspondiente en relación a los actos señalados por el quejoso.
5. Acta circunstanciada de fecha 7 de octubre de 2010, mediante la cual personal de este organismo hizo constar que se realizó llamada telefónica con

el quejoso a quien se le notificó el oficio número CEDH/VZS/MAZ/001070 relacionado con el presente expediente.

6. Con oficio número CEDH/VZS/MAZ/001070 de fecha 7 de octubre de 2010 se le notificó al quejoso el inicio del presente expediente y el visitador a cuyo cargo correría la indagación de los hechos puestos en conocimiento de este organismo.

7. Con oficio número 8686/2010 recibido ante este organismo el 13 de octubre de 2010, el agente titular de la agencia Cuarta del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, señaló que no eran ciertos los hechos expresados por el quejoso, pues refirió que ni él, ni personal de esa agencia a su cargo obligó a declarar al quejoso, no ordenó la práctica de manera negligente de diligencias, que no ordenó detener sin causa justificada, que no solicitó orden de aprehensión o comparecencia de éste, ni tampoco que hubiere detenido en flagrancia al quejoso.

Por otro lado, señaló que en los libros de gobierno de esa agencia no existe registro de alguna averiguación previa en contra del quejoso, además de que en ningún momento en esa agencia social se recepcionó declaración ministerial a éste ni siquiera en apoyo ni en vía de exhorto por parte de otras autoridades, mencionó además que las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado se encuentran a un costado de la agencia Cuarta a su cargo.

8. Con oficio número 1718/2010 recibido ante este organismo el 6 de noviembre de 2010 la titular de la agencia única del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa, informó que en esa agencia social el 10 de mayo de 2010 se inició la averiguación previa número MAZTL/**/**/2010 dentro de la cual se aprecia que la persona que aparece como quejoso resulta ser dentro de la citada indagatoria probable responsable de los delitos de atentados al pudor agravado, violación y allanamiento de morada.

Señaló que dentro de la citada indagatoria existe declaración ministerial del hoy quejoso y al inicio de la diligencia se advierte que la misma se desahogó en la sindicatura de ****, Sinaloa, el 10 de mayo de 2010 a las 21:00 horas, siendo asistido por defensor de oficio.

Argumentó además que del contenido de la indagatoria se advierte que el licenciado N2, en fecha 10 de mayo de 2010 giró oficio de solicitud de investigación policial y en la declaración ministerial del indiciado N1, se especificó que el quejoso fue presentado.

Por último señaló desconocer si elementos de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la base de ****, Mazatlán, Sinaloa, presentaron al indiciado, en razón de que ese día ella gozaba de permiso para ausentarse de esa agencia ministerial por celebrarse el día de las madres y señaló también desconocer si personal de la agencia cuarta del Ministerio Público del fuero común apoyó a esa agencia ministerial.

Para soportar su dicho, la mencionada servidora pública remitió copia certificada del contenido de la indagatoria MAZTL/**/**/2010, en la cual se desprende se practicaron las siguientes diligencias.

a. Denuncia por comparecencia de la señora N3 presentada a las 09:40 horas del 10 de mayo de 2010.

b. Acuerdo de inicio de fecha 10 de mayo de 2010, en el cual se ordena la práctica de diversas diligencias, mismo que se hace notar no se encuentra firmado, como debiera ser, por parte del agente del Ministerio Público titular.

c. Oficio número MAZTL/**/**/2010/A.P de fecha 10 de mayo de 2010, suscrito por el agente auxiliar adscrito a la agencia única del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa, con acuse de recibido el mismo día a las 11:20, en el cual solicita al Director de la Policía Ministerial del Estado comisione elementos bajo su mando a fin de que se avoquen a la investigación de los hechos denunciados.

d. Oficio número 595/2010 de fecha 10 de mayo de 2010, suscrito por el agente auxiliar adscrito a la agencia única del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa, en el cual solicita al jefe del departamento de servicios periciales designe peritos en la materia para que procedan a (se transcribe) “ELABORAR DICTAMEN ANDROLÓGICO A LA PERSONA DE NOMBRE N1, QUIEN SE ENCUENTRA EN LAS CELDAS DE LA POLICIA MINISTERIAL BASE 38 EN MAZATLÁN, SINALOA”, es de hacerse notar que dicho oficio fue recibido a las 17:02 horas del día 10 de mayo de 2011.

e. Con oficio número 596/2010 de fecha 10 de mayo de 2010, suscrito por el agente auxiliar adscrito a la agencia única del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa, solicitó al jefe del departamento de servicios periciales designe peritos en la materia para que procedan a recabar exudado vaginal a la señora N4.

f. Con oficio número 597/2010 de fecha 10 de mayo de 2010, el agente auxiliar adscrito a la agencia única del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa, solicitó al jefe del departamento de servicios

periciales designe peritos en la materia para que procedieran a realizar examen ginecológico a la señora N4.

g. Con oficio número 601/2010 de fecha 10 de mayo de 2010, el agente auxiliar adscrito a la agencia única del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa, solicitó al jefe del departamento de servicios periciales designe peritos en la materia para que procedieran a tomar placas fotográficas del área genital de la señora N4.

h. Con oficio número 599/2010 de fecha 10 de mayo de 2010, el agente auxiliar adscrito a la agencia única del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa, solicitó al jefe del departamento de servicios periciales designe peritos en la materia para que procedieran a realizar examen psicológico a la señora N4.

i. Oficio número 600/2010 de fecha 10 de mayo de 2010, suscrito por el agente auxiliar adscrito a la agencia única del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa, en el cual solicita al jefe del departamento de servicios periciales designe peritos en la materia para que procedan a (se transcribe) “REALIZAR EXÁMEN PSICOFISIOLOGICO A LA PERSONA DE NOMBRE N1, QUIEN SE ENCUENTRA EN LAS CELDAS DE LA POLICIA MINISTERIAL BASE 38 EN MAZATLÁN, SINALOA”.

j. Declaración del testigo T1 (identificado así por esta CEDH) de fecha 10 de mayo de 2010, rendida ante el agente auxiliar adscrito a la agencia única del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa.

k. Fe ministerial del lugar de los hechos, domicilio ubicado en calle **** número ** del poblado ****, Mazatlán, Sinaloa.

l. Oficio número 651/2010 suscrito por el comandante “C” de la Policía Ministerial del Estado con base en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remitió al agente del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa, parte informativo suscrito por agentes investigadores policiales adscritos a la base de Mazatlán de la citada corporación policiaca.

En dicho parte informativo se desprende que los mencionados agentes investigadores señalan que a fin de darle curso a la investigación solicitada se entrevistaron con la denunciante y su esposo, señalan que posteriormente, prosiguiendo con la investigación, se entrevistaron con el hoy quejoso N1, quien presuntamente les informó las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en que cometió el ilícito de violación.

m. Declaración ministerial del hoy quejoso N1, rendida en ****, Mazatlán, Sinaloa, ante el agente auxiliar del Ministerio Público del fuero común con asistencia de defensor de oficio.

En dicha diligencia se desprende que el hoy quejoso declaró en calidad de presentado y también que se declaró confeso de los delitos imputados a éste, siendo esto el 10 de mayo de 2010 a las 21:00 horas.

n. Dictamen pericial toxicológico practicado al quejoso N1 el 10 de mayo de 2010, obteniendo resultados negativos, sin especificarse la hora en que fue tomada la muestra al quejoso, pero sí señala que éste puede ser localizado en las celdas de la Policía Ministerial Base 38 con domicilio conocido en esta ciudad y se infiere que fue localizado en dicho lugar, pues no se señala nada respecto a que hubiere sido encontrado en un lugar diferente.

ñ. Dictamen pericial psicofísico practicado al quejoso N1, en el cual se desprende que siendo las 19:00 horas del 10 de mayo de 2010, los peritos oficiales designados realizaron exploración física e interrogatorio clínico a éste, concluyéndose que no presenta lesiones que dictaminar.

Cabe señalar que el citado peritaje señala que el quejoso puede ser localizado en las celdas de la Policía Ministerial Base 38 con domicilio conocido en esta ciudad y se infiere que fue localizado en dicho lugar, pues no se señala nada respecto a que hubiere sido encontrado en un lugar diferente.

o. Dictamen pericial andrológico practicado al quejoso N1, en el cual se desprende que siendo las 19:15 horas del 10 de mayo de 2010, los peritos oficiales designados realizaron exploración física e interrogatorio clínico a éste, concluyéndose que no presenta lesiones en la superficie peneana y cuenta con un desarrollo genital completo.

Cabe señalar que el citado peritaje señala que el quejoso puede ser localizado en las celdas de la Policía Ministerial Base 38 con domicilio conocido en esta ciudad y se infiere que fue localizado en dicho lugar, pues no se señala nada respecto a que hubiere sido encontrado en un lugar diferente.

p. Dictamen pericial ginecológico practicado a la presunta ofendida, concluyéndose que no presenta datos clínicos de contacto sexual reciente.

q. Placas fotográficas del área genital de la presunta ofendida.

9. Con oficio número CEDH/VZS/MAZ/001242 de fecha 9 de noviembre de 2010, se le requirió al comandante de la Policía Ministerial del Estado de la base de ****, Mazatlán, Sinaloa, respecto del informe previamente solicitado.

10. Con oficio número 294/2010 recibido ante este organismo el 17 de noviembre de 2010, el comandante de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la base de ****, Mazatlán, Sinaloa, informó que los hechos de los que se les señala a él y a los agentes adscritos a esa base no son ciertos, ello en virtud de que el día de los hechos todos se encontraban en franquicia, señalando que ese día esa base se encontraba sin personal operativo.

11. Con oficio número CEDH/VZS/MAZ/000352 de fecha 9 de marzo de 2011, se solicitó al comandante de la Policía Ministerial del Estado de la base de Mazatlán, Sinaloa, rindiera un informe respecto de los actos reclamados por el quejoso.

12. Con oficio número CEDH/VZS/MAZ/000353 de fecha 9 de marzo de 2011, se solicitó a Defensor adscrito al Cuerpo de Defensores de Oficio del Estado de Sinaloa, rindiera un informe en colaboración respecto de los actos que se duele el quejoso.

13. Con oficio sin número recibido ante este organismo el 29 de marzo de 2011, Defensor adscrito al Cuerpo de Defensores de Oficio del Estado de Sinaloa, informó haberse constituido en las instalaciones de la agencia Cuarta del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, a asistir en la recepción de la declaración ministerial del señor N1 el día 10 de mayo de 2010 a las 21:00 horas.

Que en dicha diligencia el hoy quejoso fue declarado en calidad de indiciado previa presentación por agentes de la Policía Ministerial del Estado en cumplimiento al oficio número 594/10 girado por el agente del Ministerio Público del fuero común de ****, refiriendo que en dicha diligencia se le hizo saber el delito que se imputaba a éste y que una vez terminada dicha diligencia se le dejó en inmediata libertad bajo las reservas de ley, ello en virtud de que no se encontraban reunidos los requisitos previstos en el artículo 16 y 19 constitucionales con relación a los artículos 116 y 170 del Código Penal vigente en el Estado.

14. Con oficio número CEDH/VZS/MAZ/000463 de fecha 31 de marzo de 2011, se requirió al comandante de la Policía Ministerial del Estado de la base de Mazatlán, Sinaloa, respecto del informe previamente solicitado.

15. Con oficio número 1518/2011 recibido ante este organismo el 6 de abril de 2011, el Comandante "C" de la Policía Ministerial del Estado, informó que el 10 de mayo de 2010, elementos de esa base de la Policía Ministerial del Estado, por órdenes del agente auxiliar del Ministerio Público del fuero común de la

sindicatura de ****, le dieron cumplimiento a una orden de investigación, ya que los agentes asignados a esa sindicatura se encontraban de franquicia, además que como el delito que se imputaba al hoy quejoso es de los considerados como graves en la legislación penal estatal, se brindó el apoyo requerido.

Señaló que el apoyo requerido lo brindaron los agentes investigadores N5 y N6 y que el quejoso jamás fue internado en los separos de esa base de la Policía Ministerial. y que solamente se le entrevistó en relación al hecho que se le imputaba, y que posteriormente el quejoso por voluntad propia accedió a rendir su declaración ministerial ante el representante social antes mencionado, pero que al momento de desahogada dicha diligencia jamás fue custodiado por agentes de esa corporación a su mando.

Argumentó también que el quejoso fue trasladado a las instalaciones de esa base a fin de dar cumplimiento al oficio de investigación ya aludido y que para evitar transgredir sus derechos humanos y agilizar la investigación, el representante social adscrito a **** se presentó en la agencia Cuarta del Ministerio Público, en donde tiene conocimiento pidió el apoyo a personal de dicha agencia para recepcionarle su declaración en dicho lugar.

Por último señaló que el quejoso jamás estuvo en calidad de detenido en esas instalaciones y que el tiempo que permaneció con ellos jamás fue víctima de malos tratos.

A fin de sustentar su dicho, el servidor público de que se trata adjuntó a su informe copia simple de los siguientes documentos:

- a) Oficio en el cual ordena se realice la investigación de los hechos denunciados.
- b) Oficio de remisión de parte informativo.
- c) Parte informativo derivado de la investigación realizada.

16. Con oficio número CEDH/VZS/MAZ/000582 de fecha 11 de mayo de 2011, este organismo estatal solicitó a la titular de la agencia única del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa, rindiera un informe en relación a los actos señalados por el quejoso.

17. Con oficio número 290/2011 recibido ante este organismo el 26 de mayo de 2011, el agente del Ministerio Público del Fuero Común de ****, Mazatlán, Sinaloa, informó que en fecha 10 de mayo de 2010, el licenciado N2, agente auxiliar del Ministerio Público del fuero común adscrito a esa representación

social, radicó e integró en esa misma fecha la mayoría de las actuaciones que integran la averiguación previa número MAZTL/**/**/2010, en contra de N1.

Que dicha indagatoria se inició en contra de éste, como probable responsable de los delitos de violación, allanamiento de morada y/o lo que resulte, cometidos el primero de ellos en contra de la libertad sexual y el normal desarrollo de la señora N4 y el segundo de ellos en contra de la inviolabilidad del domicilio y la intimidad de la señora N3.

Precisó que el personal que integra dicha agencia investigadora lo conforman el citado agente auxiliar y ella, por lo que debido a la gran carga de trabajo por los expedientes a cargo, fue hasta el 5 de abril de ese año, que ella participó en la integración de la citada averiguación previa, ello en virtud de que las personas que denunciaron los hechos, comparecieron ante esa oficina con la finalidad de ampliar su declaración, haciendo del conocimiento que ellos en ningún momento habían declarado lo que se señala en su denuncia de fecha 10 de mayo de 2010, con respecto al delito de violación y que en lo que concierne al delito de allanamiento de morada, otorgaron el perdón legal al quejoso.

También hizo del conocimiento a este organismo, que a raíz de lo anterior, citó al señor N1, con la finalidad de recabarle una ampliación de declaración respecto a lo señalado por los denunciantes, motivo por el cual a la fecha, la citada averiguación previa se encontraba en estudio y análisis para emitir la resolución que a derecho corresponda.

Respecto a los cuestionamientos formulados por personal de este organismo en el oficio que se contesta, informó que de las diligencias que integran la averiguación previa MAZTL/**/**/2010, no obra constancia alguna en la que se precise la calidad en que se encontraba el señor N1 a disposición de esa representación social, por lo que considera no le corresponde a ella informar quién ordenó el internamiento de dicha persona en las celdas de la base 38 de la Policía Ministerial del Estado, tal como se precisa en los oficios girados por el agente auxiliar adscrito a esa agencia investigadora, así como los dictámenes periciales rendidos por los peritos adscritos al departamento de servicios periciales zona sur de esa procuraduría.

Señaló que de igual forma desconoce el motivo por el cual el citado agente auxiliar asentó en la declaración ministerial del indiciado, que le fue recepcionada en esa sindicatura, cuando según el dicho del quejoso, dicha declaración le fue recepcionada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Por último señaló remitir copia certificada de las constancias que integran la averiguación previa multicitada, en la cual destacó, se advierte que en la fecha

en que se radicó la misma y se desahogaron la mayoría de las actuaciones, por parte del agente auxiliar, únicamente existe a su nombre el acuerdo de inicio, el cual no se encuentra firmado, toda vez que en ningún momento se le hizo del conocimiento de los hechos, hasta en la fecha que ya señaló con anterioridad.

Como ya se mencionó, la referida representante social remitió copia certificada de las constancias que integran la averiguación previa número MAZTL/**/**/2010, en la cual obran las diligencias ya señaladas en el punto número siete del cuerpo de la presente resolución, las cuales se omiten señalar en obvio de repeticiones y además, las diligencias siguientes:

a. Oficio sin número de fecha 28 de marzo de 2011, suscrito por el agente del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual citó a N3 a fin de que compareciera ante esa agencia social para el desahogo de una diligencia de tipo penal.

b. Ampliación de declaración de N3, de fecha 5 de abril de 2011, quien refirió que su señora madre, presunta víctima del delito de violación investigado, falleció el 14 de julio de 2010 por su edad, además dio una nueva versión respecto de los hechos denunciados inicialmente y refirió estar extrañada con su anterior declaración, ya que en ningún momento sucedieron las cosas como quedaron escritas, que era su deseo que no se continuaran las investigaciones y en lo que respecta al delito de allanamiento de morada, otorgó el perdón legal.

c. Ampliación de declaración rendida ante la representación social el 5 de abril de 2011, quien dio una nueva versión respecto de los hechos denunciados inicialmente, también adujo estar muy extrañado con el contenido de la declaración de 10 de mayo de 2010 en donde aparece su firma, ello en virtud de que él en ningún momento declaró lo ahí narrado, también refirió que no tiene interés en que se continúen las investigaciones.

d. Ampliación de declaración del quejoso N1, rendida ante la representación social, quien dio una nueva versión diversa respecto de lo declarado inicialmente y argumentó que aproximadamente a las 10:00 o 10:30 horas de 10 de mayo 2011, estando en su lugar de trabajo, fue cuando se lo llevaron los elementos de la Policía Ministerial del Estado.

18. Con oficio número CEDH/VZS/MAZ/000726 de fecha 10 de junio de 2011, se solicitó en vía de colaboración al Jefe del Departamento de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Zona Sur, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, rindiera un informe relacionado con los hechos motivo de la queja.

19. Con oficio número de folio 11038 recibido ante este organismo el 14 de junio de 2011, el Jefe del Departamento de Servicios Periciales de la Zona Sur del Estado, informó que el C. N1, sí había sido examinado por peritos de ese departamento cuando se encontraba en las celdas de la Policía Ministerial del Estado base 38 de Mazatlán, Sinaloa y que éste no se encontraba en algún otro lugar diferente al que les fue señalado por el agente del Ministerio Público del Fuero Común de **** en su oficio de petición.

Señaló también que la hora aproximada en que se recabó la muestra biológica (orina) del hoy quejoso lo fue a las 19:15 horas del 10 de mayo de 2010 en las celdas de la Policía Ministerial del Estado, base 38 en Mazatlán, Sinaloa.

Para soportar su dicho, el citado funcionario anexó a su informe copia certificada de dictámenes médicos psicofísico y andrológico y dictamen químico toxicológico completo, todos practicados al hoy quejoso el 10 de mayo de 2010, entre las 19:00 y 19:15 horas.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

A. El 10 de mayo de 2010, aproximadamente a las 10:00 horas, elementos de la Policía Ministerial del Estado de la base 38 ubicada en Mazatlán, Sinaloa, se constituyeron en el lugar donde se encontraba laborando el hoy quejoso N1, en la Sindicatura de ****, perteneciente al municipio de Mazatlán, Sinaloa, con el propósito de entrevistarle en cumplimiento a una orden de investigación girada por el licenciado N2, en su carácter de agente auxiliar del Ministerio Público adscrito a la agencia del Ministerio Público del fuero común de **** Mazatlán, Sinaloa.

Acto seguido los agentes policiacos, sin mandamiento legal alguno, lo privaron de su libertad y lo trasladaron a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado ubicadas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, habiendo quedado acreditado que fue mantenido en las celdas -separos preventivos- de la citada corporación policiaca, hasta las 21:00 horas del mismo día, hora en que le fue recepcionada su declaración ministerial en las instalaciones de la Agencia Cuarta del Ministerio Público del fuero común, que se encuentra adjunta a la mencionada base policial.

Resulta pertinente señalar que durante el tiempo en que fue detenido en las citadas celdas policiacas, el representante social auxiliar adscrito a la agencia única del Ministerio Público de ****, Mazatlán, Sinaloa, teniendo conocimiento de tal circunstancia, es decir, que dicha detención resultaba por demás arbitraria, ordenó además se practicaran diversas pruebas periciales a éste y le

repcionó su declaración ministerial como indiciado y no como presentado como se señaló en el informe solicitado.

IV. OBSERVACIONES

Antes de entrar al estudio de las violaciones a derechos humanos que dieron origen a la presente recomendación, resulta oportuno señalar que esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, no se opone a la prevención, investigación y persecución de los delitos por parte de las autoridades competentes; por el contrario, hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones públicas correspondientes, cumpla con su deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar con los medios a su alcance los ilícitos que se cometan en el ámbito de su competencia, a fin de identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones pertinentes.

En primer término conviene precisar previamente que la conducta que se analiza desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que genéricamente se expresa bajo el concepto de violación al derecho a la libertad personal, en la modalidad de detención arbitraria se caracteriza por la acción que tiene como resultado la privación de la libertad de una persona, realizada por un servidor público sin que exista flagrancia, orden de aprehensión girada por juez competente u orden de detención expedida por Ministerio Público en caso de urgencia.

Los motivos de queja expresados por el señor N1, estribaron esencialmente en la privación de la libertad de que fue objeto, por parte de servidores públicos adscritos a la Policía Ministerial del Estado y la forma en que dicha acción fue utilizada para intentar acreditar hechos delictivos de los cuales él se dice inocente.

Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de las evidencias de que se allegó esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se acreditan violaciones a los derechos a la libertad consistentes en detención arbitraria, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Policía Ministerial del Estado de la base de Mazatlán, Sinaloa, así como al agente auxiliar adscrito a la agencia única del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa, cometidos en agravio del señor N1, en atención a las siguientes consideraciones:

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Derecho a la libertad

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Detención arbitraria

Al rendir su informe, el comandante de la Policía Ministerial del Estado de la base de Mazatlán, Sinaloa, aceptó expresamente la participación de elementos de esa corporación policiaca en los hechos reclamados por el quejoso; sin embargo, adujo que el quejoso jamás fue internado en los separos de esa base de la Policía Ministerial ni estuvo en calidad de detenido en dichas instalaciones, que solamente se le entrevistó en relación al hecho que se le imputaba, ello con base en el oficio de investigación girado por el agente del Ministerio Público, y que posteriormente el quejoso por voluntad propia accedió a rendir su declaración ministerial ante el representante social.

Señaló que el quejoso fue trasladado a las instalaciones de la base de Mazatlán, Sinaloa, a fin de dar cumplimiento al oficio de investigación ya aludido y que para evitar transgredir sus derechos humanos y agilizar la investigación, el representante social adscrito a ****, se presentó en la agencia cuarta del Ministerio Público, en donde tiene conocimiento pidió el apoyo a personal de dicha agencia para recepcionarle su declaración en dicho lugar.

Por ello, es importante resaltar que los elementos policiacos en el parte informativo señalaron que el señor N1 fue entrevistado en su domicilio; sin embargo, nada señalan con respecto a lo que sucedió con posterioridad, es decir que nada hay con relación al hecho de que el quejoso hubiere “accedido voluntariamente” a acudir ante el representante social a rendir su declaración ministerial, tampoco el hecho de haberlo trasladado a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado de Mazatlán, Sinaloa, ni el haberlo mantenido privado de su libertad en los separos preventivos de la citada corporación policiaca.

Tal circunstancia, es decir, la detención arbitraria de la que fue objeto el quejoso, quedó acreditada con la aceptación expresa del comandante policiaco y la negativa del citado funcionario en el sentido de que señaló el quejoso jamás fue internado en los separos con que cuenta esa base ministerial y que jamás estuvo detenido en esas instalaciones, ello quedando desvirtuado con las solicitudes de práctica de las periciales correspondientes al hoy quejoso, en donde el agente auxiliar adscrito a la agencia del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, informó precisamente a los peritos que el quejoso se encontraba en las celdas de la policía ministerial, ello para su valoración respectiva.

Dicha negativa de haber mantenido detenido al quejoso interno en las celdas a que nos hemos referido, también quedó desvirtuada con el propio informe rendido por los peritos que practicaron los dictámenes solicitados, quienes señalaron que valoraron clínicamente al quejoso al haberlo tenido a la vista en

las celdas de la Policía Ministerial del Estado base 38 de Mazatlán, Sinaloa, como se lo señaló el agente del Ministerio Público auxiliar de **** Mazatlán, Sinaloa, en los oficios girados a efecto de llevar a cabo las periciales correspondientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

Todo lo anterior implica que el quejoso o agraviado fue sustraído de su ámbito de libertad deambulatoria por los elementos policíacos que lo entrevistaron y por ende, elaboraron el parte informativo sin que resulte justificable el hecho de que se haya informado a este organismo que se trasladó al quejoso hasta Mazatlán, Sinaloa, con base en el oficio de investigación girado por el representante social, pues en este oficio, sólo se les solicitó realizar precisamente una investigación de los hechos y de ninguna forma se ordenaba que éste fuera detenido y/o presentado ante alguna autoridad.

Por otra parte, al analizar la conducta anómala atribuida a los elementos policíacos y al representante social, debe destacarse que el licenciado N2, agente auxiliar adscrito a la agencia del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa, tenía conocimiento de los actos llevados a cabo por los agentes de la policía ministerial, lo cual quedó de manifiesto cuando dicho funcionario informó a los peritos designados que el hoy quejoso se encontraba interno en las celdas de la base policiaca tantas veces citada.

También debe señalarse que dicho funcionario, lejos de hacer cesar de inmediato dicho acto vulnerador de los derechos humanos y en su caso proceder a la investigación del hecho probablemente constitutivo de delito dentro de una nueva indagatoria, como era su obligación, ordenó la práctica de las periciales a que nos hemos referido y además se trasladó hasta las oficinas de la agencia cuarta del Ministerio Público del fuero común de Mazatlán, Sinaloa, lugar en donde recepcionó la declaración ministerial al señor N1.

Lo cual fue corroborado por D1 (identificado así por esta CEDH), en su carácter de Defensor de Oficio adscrito a las agencias del Ministerio Público del fuero común en esta ciudad, ya que él mismo manifestó en el informe rendido, que el quejoso fue declarado en calidad de indiciado previa presentación por agentes de Policía Ministerial en cumplimiento al oficio número 594/10 por el agente del Ministerio Público del fuero común de ****, Mazatlán, Sinaloa, en donde en dicha diligencia se le hizo saber el motivo por el cual se encontraba declarando en relación al delito de violación, y una vez terminada dicha diligencia el C. N2, dejó al quejoso en inmediata libertad bajo las reservas de ley toda vez que no se encontraron reunidos los requisitos establecidos en los artículos 16 y 19 constitucionales.

Es importante señalar que D1, corroboró que dicha diligencia fue llevada a cabo en las instalaciones que ocupa la agencia cuarta del Ministerio Público del fuero común en la ciudad de Mazatlán el 10 de mayo de 2010 a las 21 horas.

Al respecto, debe precisarse que al rendir su declaración ministerial, quedó asentado que el quejoso se encontraba bajo la figura y/o calidad jurídica de “presentado”; sin embargo, de las copias certificadas de la averiguación previa número MAZTL/**/**/2010 que fueron remitidas a este organismo, no existe constancia y/o acuerdo alguno debidamente fundado y motivado que la representación social hubiere dictado a fin de sustentar el acto jurídico consistente en la detención del quejoso, su traslado hasta el municipio de Mazatlán, Sinaloa, su internamiento en los separos preventivos y la correspondiente presentación para recepcionarle su declaración ministerial.

Por ello se afirma que mediante esas conductas, los elementos policíacos y el mencionado representante social auxiliar, transgredieron los derechos constitucionales del señor N1, extralimitando su competencia o atribuciones dejando de lado los principios que rigen su actuar, como lo son de legalidad, eficiencia, profesionalismo, eficacia y respeto a los derechos humanos.

Asimismo, en el caso que nos ocupa las autoridades señaladas como responsables no acreditaron que el acto llevado a cabo por elementos de la Policía Ministerial del Estado, con el consentimiento y participación del representante social auxiliar ya mencionado, se haya realizado precisamente con las formalidades que establece la Ley.

Por el contrario, de las probanzas con que cuenta esta CEDH se desprende que los elementos policíacos N5 y N6 y el propio licenciado N2, agente auxiliar, incurrieron en una desviación de las facultades de investigación y en el último de los señalados de persecución de los delitos, toda vez que su actuación la llevaron a cabo con fines distintos a los previstos en la norma vigente.

Al respecto, es preciso señalar que la detención policial como medida cautelar, debe tener como único propósito evitar la fuga del sospechoso de un acto delictivo, y con ello asegurar su comparecencia ante la autoridad competente, para que dentro del plazo legal sea determinada su situación jurídica.

En esa tesitura, la conducta asumida por los referidos servidores públicos contraviene diversos ordenamientos tanto locales como internacionales que establecen lo siguiente.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

Convención Americana Sobre Derechos Humanos:

“Artículo 7. Derecho a la libertad personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios.”

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

“Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.”

Las violaciones a los derechos constitucionales que se encuentran determinadas por la acción desplegada por estos servidores públicos a saber, son las siguientes:

El comandante de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la base de Mazatlán, Sinaloa, en su informe señaló que el señor N1 nunca estuvo detenido en esas instalaciones, que jamás fue internado en los separos de esa base ministerial.

En cambio admite que personal ministerial trasladó al hoy quejoso a la base policiaca en virtud de que éste por propia voluntad decidió acudir a declarar

ante el Ministerio Público y a fin de dar cumplimiento al oficio de investigación girado por el representante social.

Sin embargo, como ya se explicó dicha negativa quedó desvirtuada no sólo con la aceptación del comandante policiaco, en el sentido de que elementos bajo su mando sí trasladaron al hoy quejoso a la ciudad de Mazatlán -aduciendo que por voluntad propia de éste- sino también, con la afirmación del representante social en el sentido de que dicho quejoso, podía ser localizado en las celdas de la policía Ministerial, situación que a su vez fue corroborada por los propios peritos quienes valoraron clínicamente al quejoso cuando se encontraba interno en dicho lugar y finalmente con la propia declaración ministerial de éste, en donde quedó asentado que había sido presentado.

Con todo lo anterior, quedó evidenciada la privación de la libertad del señor N1, al margen de todo procedimiento legal, pues el quejoso no fue detenido bajo la figura jurídica denominada flagrancia, tampoco existía una orden de presentación, detención y/o aprehensión en su contra que hubiera sido girada por autoridad competente, pues al respecto, sólo mediaba un oficio de investigación de los hechos girado por el representante social multicitado.

En esta tesitura, existe plena convicción por parte de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de que los CC. N5 y N6, ambos agentes investigadores de la Policía Ministerial del Estado y el licenciado N2, agente auxiliar adscrito a la agencia del Ministerio Público del fuero común de la sindicatura de ****, Mazatlán, Sinaloa, infringieron lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; y que sólo en los casos de delito flagrante cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.

De igual manera los agentes policiacos multicitados, incumplieron lo establecido en el noveno párrafo del artículo 21 constitucional, que indica que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que la Constitución Federal señala y que la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

Los principios antes señalados no fueron tomados en cuenta en el momento que los citados servidores públicos procedieron a privar de su libertad personal

al señor N1, llevando a cabo una detención sobre su persona sin causa o motivo legal existente.

En consecuencia, el actuar de los mencionados servidores públicos, fue contrario a lo legalmente establecido, ya que el señor N1 no fue sorprendido durante ni después de la comisión de alguna conducta delictiva, ilícita o infractora, pasando por alto no sólo la legislación local y nacional sino también instrumentos internacionales, tal como lo establece en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que indica que “*Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado*”.

Así mismo se quebrantó lo señalado en el artículo XXV, primer párrafo de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre que refiere que “*Nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes*”.

Por consiguiente no se observó lo establecido en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala:

“Artículo 7. Derecho a la libertad personal.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por la leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios...”.

Luego entonces se pasó por alto lo señalado en la siguiente tesis jurisprudencial:

“ABUSO DE AUTORIDAD, POLICÍAS. Debe estimarse que el cargo oficial encomendado a un miembro de la policía para efectuar una detención, no le confiere la facultad de disparar ni de ejercer violencia ilegal sobre el individuo a quien va a detener, aún en el supuesto de que éste opusiera resistencia, máxime si se atiende a que, conforme al párrafo final del artículo 19 constitucional, todo maltrato en la aprehensión de una persona, es calificado como un abuso, que debe ser corregido por las autoridades, ahora bien, los policías pueden repeler las agresiones injustas, actuales, implicas de un peligro inminente y grave, no por aquella calidad, sino como simples individuos humanos; pero para que la excluyente de legítima defensa opere, deben darse necesariamente los elementos antes dichos.

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte: LXII, Segunda Parte
Tesis:
Página: 9
Precedentes
Amparo directo 6770/61. Joaquín Bueno Montoya y coags. 13 de agosto de 1962. 5 votos. Ponente: Alberto R. Vela.
Página: 1793.”

Es dable mencionar además, que la conducta desplegada por los agentes de la Policía Ministerial del Estado y por representante social auxiliar del Ministerio Público del fuero común, puede ser constitutiva de delito, si encuadran en la figura típica de abuso de autoridad contemplada en el artículo 301 del Código punitivo Estatal.

El mencionado precepto legal establece el concepto del delito de abuso de autoridad cometido por los servidores públicos.

“Comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que:

.....

II. Ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, haga violencia a una persona sin causa legítima o la veje o la insulte o la prive su libertad.

.....

VII. Ejecute cualquier otro acto arbitrario o atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Federal o en la del Estado.”

.....

IX. Teniendo conocimiento de una privación ilegal de libertad no la denunciare a la autoridad competente o no la haga cesar, si esto estuviere en sus atribuciones.

.....

Los anteriores preceptos son muy claros en establecer las formas en que se comete abuso de autoridad por una autoridad o servidor público, de tal suerte que los elementos policíacos y el representante social auxiliar, incurrieron en violaciones a derechos humanos en la especie de libertad del señor N1 al llevar a cabo las conductas sin justificación legal alguna.

Con base en lo expuesto anteriormente y al tener como marco el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en la entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de

los derechos fundamentales que le son inherentes, así como al artículo 4º Bis segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa se permite formular a usted, señor Procurador General de Justicia del Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se giren instrucciones a los elementos de la Policía Ministerial del Estado y a todos los agentes del Ministerio Público de la entidad, para que al llevar a cabo sus actividades, lo hagan siempre en apego a los ordenamientos que rigen su funcionamiento evitando con ello transgredir los derechos humanos de las personas que por alguna razón se encuentren involucradas en hechos ilícitos.

SEGUNDA. Instruya a la Unidad de Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que al tomar en cuenta los razonamientos expuestos por esta Comisión tramite el procedimiento correspondiente, en contra de los elementos investigadores N5 y N6, de la Policía Ministerial del Estado y en contra del licenciado N2, agente auxiliar adscrito a la agencia única del Ministerio Público del fuero común de la sindicatura de ****, Mazatlán, Sinaloa, y en caso de ser procedente se impongan las sanciones administrativas correspondientes e informe a este organismo lo conducente.

TERCERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se inicie la averiguación previa que corresponda en contra de los elementos investigadores N5 y N6, de la Policía Ministerial del Estado y en contra del licenciado N2, agente auxiliar adscrito a la agencia única del Ministerio Público del fuero común de la sindicatura de ****, Mazatlán, Sinaloa, por los hechos puestos de su conocimiento y en su momento resuelva lo que conforme a derecho proceda.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Notifíquese al licenciado Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador General de Justicia del Estado de la presente Recomendación, misma que en los archivos

de esta Comisión quedó registrada bajo el número 17/2012, debiendo remitírsele con el oficio de notificación correspondiente una versión de la misma con firma autógrafa del infrascrito.

Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, manifieste a esta Comisión si acepta la presente Recomendación, solicitándosele expresamente que en caso negativo, motive y fundamente debidamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente de su protesta de guardar la Constitución, lo mismo la General de la República que la del Estado así como las leyes emanadas de una y de otra.

Se le hace saber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una importante reforma en materia de derechos humanos la cual fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el pasado 10 de junio de 2011.

El segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de la misma, expresamente señala hoy día:

“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.”

Ahora bien, en caso de aceptación de la misma deberá entregar dentro de los cinco días siguientes las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia.

Notifíquese al señor N1, en su calidad de quejoso, de la presente Recomendación, remitiéndole con el oficio respectivo un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del infrascrito para su conocimiento y efectos legales procedentes.

EL PRESIDENTE

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO